



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL – **ÚNICA INSTANCIA SENTENCIA**  
**RADICACIÓN.** 05 360 31 05 **001 2021 00296 01**  
**DEMANDANTE:** NATALIA GARCÉS TORO  
**DEMANDADA:** INVERSIONES ESTRATÉGICAS SHADAY SAS EN LIQUIDACIÓN

Medellín, primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2022, por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia.

**I. ANTECEDENTES**

Pretende la demandante que se declare que entre las partes existió un contrato a término indefinido entre el 5 de marzo de 2016 y el 12 de octubre de 2020 y que el documento firmado el 13 de octubre siguiente es inválido, por tanto, fue despedida sin justa causa; en consecuencia, solicita que se condene a la demandada a pagar los valores descontados de la liquidación por los mercados no cancelados por María Alejandra Maldonado por un total de \$1.892.341, las indemnizaciones de los arts. 64 y 65 del CST, los intereses moratorios y la indexación (págs.. 5, 6 arch. 3, pág. 3 arch. 12 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con la demandada el 5 de marzo de 2016 con el fin de desempeñarse inicialmente como Cajera; en febrero de 2019 inició funciones como Supervisora durante 2 meses y luego nuevamente volvió a ser Cajera; en julio de 2020 regresó como Supervisora, pero de lunes a miércoles ejecutaba funciones de Cajera; desde el 30 de agosto de 2020 fungió como Encargada de Domicilios, cargos todos estos cuyas funciones se describen en el hecho 4º; el 10 y el 11 de septiembre de 2020 la cliente María Alejandra Maldonado solicitó domicilios por \$592.000 y \$379.000, respectivamente, sin embargo, ella no los atendió dado que el primer día estaba de descanso y el segundo día tenía a cargo otras funciones; la cliente mencionada solicitó que el segundo domicilio le fuera enviado en taxi y que lo cancelaba en el lugar de destino, lo que le generó desconfianza, por lo que le solicitó el comprobante de pago del pedido, el cual fue enviado posteriormente a su celular, de modo que, al ver la importancia del domicilio, decidió llevarlo personalmente junto con otra compañera de trabajo y luego de cumplir con su turno laboral, por tanto, el domicilio fue entregado en forma exitosa.

El 17 de septiembre de 2020 Marta Becerra le comentó que no ingresaron a la cuenta de la empleadora los pagos de los domicilios del 10 y 11 de septiembre, por lo que le reenvió los recibos de pago y la captura de pantalla de las conversaciones sostenidas en *whatsapp* en el celular que tenía a su cargo, sin embargo, dentro de sus funciones no estaba la verificación de pagos que se hacen por medio de transferencia bancaria, solo los pagos que se hacían en efectivo a los transportadores que le liquidaban directamente a ella, tampoco tenía acceso a la clave de la cuenta bancaria de la empresa para verificar los movimientos, dicha clave le fue entregada el 18 de septiembre siguiente a su jefe directa, Verónica San Juan; indicó que solo verificaba por medio de los recibos de pago que le enviaban los clientes por *whatsapp* y después los constataba con la persona encargada de tesorería.

Agregó que el 6 de octubre de 2020 Marta Becerra le informó que tampoco ingresaron a la cuenta de la empleadora los pagos de los domicilios del 1º y 3 de septiembre de esa anualidad, efectuados por María Alejandra Maldonado, por lo que también se los iban a descontar de su nómina, no obstante, nunca tuvo conocimiento de esos pedidos; en el comprobante de nómina de la primer quincena de octubre de 2020 le descontaron \$268.916 bajo el concepto "*préstamo empresarial*" que nunca le solicitó a su empleadora,

así que le reclamó a su jefe directa, quien le respondió que le iban a restar lo de los mercados; de igual forma en la liquidación final de prestaciones sociales le dedujeron \$1.623.425 bajo el mismo concepto, con lo que nunca estuvo de acuerdo y así lo expresó en la última hoja del contrato de transacción que firmó bajo presión el 13 de octubre de 2020 como consecuencia de un plan de retiro voluntario ofrecido por Natalia Velásquez, encargada del área de Talento Humano, desconociendo totalmente las consecuencias jurídicas que le traía la suscripción de ese documento, dado que no recibió asesoría legal al respecto (págs.. 2-5 arch. 3, archs. 5, 12 C01).

## II. TRÁMITE PROCESAL

El proceso le correspondió al Juzgado 8º Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, quien a pesar de que inicialmente inadmitió la demanda, por solicitud de la demandante, en proveído del 13 de septiembre de 2021 declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al circuito de la misma especialidad de Itagüí, por ser este el domicilio principal de la demandada (archs. 2, 4-7 C01).

La demanda fue conocida por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí, quien previa subsanación, la admitió mediante auto del 20 de octubre de 2021, ordenando la notificación y traslado a la demandada (archs. 8-13 C01).

**Inversiones Estratégicas Shaday SAS en liquidación**, contestó en audiencia celebrada el 3 de octubre de 2022, oponiéndose a las pretensiones con el argumento de que la demandante era la responsable de aprobar los despachos de domicilios cuando se encontraban debidamente certificados y con la certeza de haber sido pagados, para que luego ella legalizara todo ante el área de tesorería, con la que hacía la verificación en tiempo real de la transferencia; sin embargo, obró de manera equivocada y negligente al permitir el despacho de domicilios sin haber verificado el pago, habiendo entregado ella personalmente uno de esos pedidos.

Informó que por un error involuntario en la colilla de nómina y en la liquidación del contrato aparecen los descuentos efectuados bajo otro concepto, pero los mismos fueron efectuados por las inconsistencias presentadas con la demandante como Coordinadora de Domicilios, sin embargo, estaban debidamente autorizados por la trabajadora. Propuso como excepciones cobro

de lo no debido, carencia de derecho sustantivo, falta de causa en las pretensiones de la demanda, cumplimiento de las obligaciones legales, prescripción, inexistencia de derecho sustancial, validez objetiva de contrato de transacción por terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo y buena fe (archs. 15, 22, 23 C01).

### **III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí - Antioquia, en sentencia proferida el 3 de octubre de 2022, condenó a la demandada a reintegrar a la demandante \$1.892.341 por concepto de deducciones ilegales, más el pago de la indemnización del art. 65 del CST liquidada con \$32.419 diarios entre el 13 de octubre de 2020 y el 13 de octubre de 2022 para un total de \$23.342.016, y a partir de allí correrán los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera hasta cuando se efectúe el pago y las costas; absolvió a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra; declaró parcialmente probada la excepción de inexistencia del derecho sustancial y no probada la de prescripción.

Para lo que interesa a la alzada, señaló que los descuentos efectuados en la última quincena laborada y en la liquidación definitiva de prestaciones sociales fueron ilegales, porque obedecieron a las inconsistencias presentadas en los 4 domicilios despachados en septiembre de 2020, que se adujeron como fallas en las funciones y responsabilidades de la demandante en su calidad de Coordinadora de Domicilios, empero, de la autorización general que ella firmó no se extrae que la trabajadora la hubiera efectuado en los términos exigidos legalmente, es decir, que haya sido por su propia voluntad ni se indicó a qué deuda se hacía referencia, sus condiciones o términos en que se pactó. Además, los faltantes verificados por la demandada como producto de los domicilios no pueden ser equiparados a un saldo adeudado por la trabajadora a su empleador, por obligaciones reconocidas a cargo de aquella; tampoco las pérdidas del empleador pueden ser asumidas por los trabajadores.

En relación con la moratoria del art. 65 del CST sostuvo que no se acreditó por parte de la entidad, que el actuar relacionado con los descuentos que efectuó y con los cuales quedó debiendo parte de los salarios, estuvo provisto de buena fe, solamente demostró la intención de hacer partícipe a la trabajadora de las pérdidas ocasionadas en la sociedad por la falta de pago de

los domicilios que, según la empleadora, estaban a cargo de la verificación que hiciera la demandante (archs. 22, 23 C01).

#### **IV. RECURSO DE APELACIÓN**

La parte demandada adujo que se acreditó que la demandante en su condición de Coordinadora de Domicilios le asistía la obligación de verificar los pagos para proceder con la autorización de despachos; ella admitió que en septiembre de 2020 aprobó despachos y uno de ellos lo llevó personalmente sin contar con la autorización de la empresa, a sabiendas de que no había surtido el proceso logístico de verificación de pago de despachos, que según la prueba testimonial ella sí era quien lo hacía. De igual forma en la transacción la demandante señaló que tuvo un yerro de su parte al autorizar despachos de domicilio sin el pago efectivo de la Sra. Maldonado.

Solicitó la exoneración de la indemnización moratoria porque sí existió buena fe en el cumplimiento de las obligaciones laborales, y nunca actuó en forma ilícita ya que hubo documentos firmados por la demandante que llevaban a sustentar los descuentos de nómina y de la liquidación final del contrato, en aquellos casos que se hubieran presentado inconsistencias en su condición de Coordinadora de Domicilios; también existe una cláusula contractual donde las partes de mutuo acuerdo establecieron que se le podían realizar descuentos a la trabajadora en caso de que hubieran inconsistencias o pérdidas a su cargo. Agregó que no se hizo un análisis de los alcances transaccionales que tiene el reconocimiento de la bonificación, pues es claro que la discusión relativa a si había lugar o no a los descuentos por las inconsistencias demostradas, se encuentra debidamente transada y fuera del litigio con el pago de esa bonificación.

#### **V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA**

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 5 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 2 de junio de 2023, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (archs. 2-4 C02).

La demandante presentó alegaciones de instancia con las que solicita se confirme la decisión, mientras que la demandada allegó un escrito con el fin de exteriorizar la «sustentación final» de la apelación (archs. 5-8 C02), frente a lo que ha de advertir la Sala que no se admitirán por parte del recurrente, esas argumentaciones adicionales que no expuso dentro de la audiencia respectiva, como tampoco las señaladas en el escrito radicado ante el juzgado el 5 de octubre de 2022 con las que pretendió ampliar y complementar el recurso (arch. 24), pues a pesar de que se trata de un proceso ordinario laboral de única instancia, cuya apelación se surte en esta ocasión, debido a la procedencia de la doble instancia por variación de la competencia en razón de la cuantía, al superar la condena los 20 SMLMV (CSJ STL7062-2023, CSJ STL14581-2022, CSJ STL11336-2022, CSJ STL2441-2022), ello no habilita al recurrente a presentar en forma escrita y extemporánea tantas argumentaciones como aspire frente a su medio de impugnación pues, en virtud del principio de oralidad que gobierna el proceso laboral, el recurso ha de ser presentado *«en el acto de la notificación de la sentencia mediante la sustentación oral estrictamente necesaria»*, tal y como lo dispone el art. 66 del CPTSS modificado por el art. 10º de la Ley 1149 de 2007<sup>1</sup> (en concordancia con los arts. 41, 72, 73 y 80 *idem*), en relación con la apelación de las sentencias dictadas en procesos de primera instancia.

De esta manera, la competencia del Tribunal está limitada a los temas estrictamente planteados y sustentados en el recurso de apelación, pues el término para presentar alegaciones en segunda instancia, una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso de apelación, no constituye una oportunidad adicional para exponer nuevos motivos de inconformidad frente a la sentencia de primera instancia (CSJ SL9512-2017).

## VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación de la parte demandada, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si los descuentos realizados a la demandante en su última nómina y en la liquidación de prestaciones sociales, por un total de \$1.892.341, resultan ser deducciones

---

<sup>1</sup> El cual fue objeto de control constitucional en la sentencia CC C-493-2016, en donde se le encontró ajustado a la Carta Política.

ilegales, y si como consecuencia de ello, es viable imponer la moratoria establecida en el art. 65 del CST.

**Descuentos ilegales.-** No fueron objeto de discusión los descuentos realizados a la demandante por \$1.623.425 en la liquidación final de prestaciones sociales bajo el concepto “*otros préstamos – descuadres*” y por \$268.916 en el comprobante de nómina de la primera quincena de octubre de 2020 con la denominación “*préstamo empresarial*” (págs. 27, 28 arch. 3, págs. 39, 56, 57, 66 arch. 15 C01); sin embargo, según lo manifestado en la contestación, tales deducciones no corresponden contablemente a esos conceptos sino a inconsistencias presentadas por la demandante como Coordinadora de Domicilios, y allí se admitió que los mismos se efectuaron por estar debidamente autorizados, mientras que la demandante sostuvo que nunca tuvo préstamos con su empleadora y que de lo que verdaderamente se trató, fue de deducciones efectuadas en sus acreencias respecto de domicilios que no fueron cancelados.

En este caso, se debe advertir que en virtud del principio de consonancia, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno en relación con si era o no la responsabilidad de la demandante en los distintos cargos que desempeñó, el verificar en tiempo real las transferencias que se hacían de los domicilios que ella despachó, porque ello estaría atado a una argumentación relativa a la modalidad y justeza de la terminación del contrato de trabajo, situación que aquí no fue apelada; por tanto, se deberá establecer con el material probatorio, si los mencionados descuentos se encuentran legalmente permitidos.

El num. 1º del art. 59 del CST se prohíbe a los empleadores efectuar descuentos sobre salarios, sin autorización previa escrita del trabajador para cada caso, con las excepciones que allí se establecen; el art. 150 *idem* dispone que «*Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros, autorizadas en forma legal*», y según lo consagrado en el art. 55 del Decreto 1481 de 1999, «*Toda persona natural, empresa o entidad pública o privada estará obligada a deducir o retener, de cualquier cantidad que deba pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que éstos adeuden al fondo de empleados, que consten en los estatutos, reglamentos, libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el asociado deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo*».

También la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia antaño ha señalado que la restricción al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización, se justifica en el desarrollo de la relación de trabajo, pues en ese momento aún se encuentra en vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador (CSJ SL16794-2015).

En la transacción firmada entre las partes el 13 de octubre de 2020 para dar finiquito a la relación laboral que las ató, la demandante impuso esta nota en manuscrito *«...dejo como constancia que no me hago responsable por cobros de área de domicilios hasta que la señora realice el pago oportuno.»* (págs. 36-40 arch. 3, págs. 44-47 arch. 15 C01).

En el derecho de petición del 26 de octubre de 2020 la demandante señaló que el cobro de 4 mercados suma \$1.836.160 monto del cual se le hizo una deducción de nómina el 15 de octubre de esa anualidad por \$268.916 *«sin embargo el 13 de octubre en la terminación de contrato se dejó la aclaración por escrito que no autorizaba ningún tipo de deducción de este dinero, además no se me notificó, ni se llevó a cabo un proceso disciplinario...»* (pág. 41 arch. 3, pág. 58 arch. 15 C01).

La demandada respondió la petición el 11 de noviembre siguiente en donde se le indicó a la demandante que se le efectuó el descuento de \$1.836.160 dado que en el reporte de domicilios y de contabilidad hay constancia de que la trabajadora autorizó el despacho de 4 mercados que suman ese monto y *«sobre los cuales no se realizó pago alguno por los mismos, siendo esto de su responsabilidad. Es importante recordar que, según versiones allegadas de su parte a la compañía, la señora que realizó las compras tenía un problema en el banco y lo estaba solucionando, sin que a la fecha usted hubiera reportado la novedad de pago de estos domicilios. De conformidad con el cargo contratado, era su responsabilidad verificar el pago de los domicilios para aprobar su despacho o entrega (...). La empresa cuenta con una autorización firmada de su parte en la cual autoriza a la sociedad empleadora a descontar de la liquidación final del contrato de trabajo las sumas de dinero que quedaran pendientes de cancelación; para el caso en concreto, a la fecha la empresa no ha recibido el reporte de su parte en donde se evidencia el pago de los domicilios pendientes de cancelación y que fueron aprobados por su parte»* (págs. 60-62 arch. 15 C01).



La apelante sostiene que la autorización se encuentra efectuada por la trabajadora desde el momento en que se suscribió el contrato de trabajo; si se revisa el documento que aportó como prueba, visible en las págs. 30 a 37 del arch. 15 C01, no se observa que de manera expresa y voluntaria la demandante haya autorizado a efectuar descuentos sobre sus acreencias estrictamente para financiar el pago de mercados que eventualmente no se pagaran por los clientes a través de los domicilios efectuados a la compañía, solamente en el num. 17 de la cláusula 10ª se estableció como obligación a cargo de la trabajadora, entre otras cosas el *«responder ante el empleador por cualquier perjuicio que este pueda recibir como consecuencia de su proceder negligente o imprudente o por incumplimiento de sus deberes y obligaciones»*. Así mismo, en la cláusula 13 se dispuso de manera global lo siguiente:

**DÉCIMA TERCERA - Autorización Descuentos:** Con la suscripción de este contrato EL EMPLEADO autoriza expresamente a EL EMPLEADOR para que durante la vigencia del presente contrato o cuando el mismo termine por cualquier causa, compense del valor de sus salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones que le correspondan, las sumas que quede a deberle por los siguientes motivos: **1)** Las sumas que salga a deber por préstamos debidamente autorizados por escrito; **2)** El valor de los elementos, mercancías, herramientas, utensilios y demás bienes que haya recibido, en caso de su pérdida, extravío, apropiación indebida o por restituir en mal estado de conservación o deterioro que no provenga de la naturaleza o uso legítimo de los mismos; **3)** Los dineros que se le hubieren confiado para su recaudo o manejo o que dispongan abusivamente de ellos en perjuicio económico de EL EMPLEADOR; **4)** El valor de los daños intencionales o con culpa grave causados a los enseres que se le confieren para desempeño de sus labores, salvo el deterioro natural por uso común u ordinario de los mismos; **5)** Por descuadres de caja, cupos empresariales, mayor valor pagado en nómina; **6)** Las sumas de dinero que por cualquier motivo llegare a adeudar a EL EMPLEADOR y que sumariamente puedan demostrarse.

Se aportó otra autorización genérica que contiene la firma de la demandante, sin fecha, en la que se indica que *«autorizo expresamente al empleador Inversiones Estrategicas Shaday para que retenga y cobre de mi liquidación final de prestaciones sociales, salarios y/o indemnizaciones, los saldos que esté adeudando a la empresa para la cual laboro por cualquier concepto, y al momento de la terminación del contrato de trabajo por cualquier motivo»* (pág. 38 arch. 15 C01).

En el plan de retiro voluntario presentado el 13 de octubre de 2020 por parte de la Auxiliar de Nómina y Talento Humano de la empresa a la demandante, a pesar de no hacer alusión a faltas cometidas por esta última o incumplimientos en sus obligaciones como trabajadora, ni a mercados no pagados, sí tiene una nota manuscrita que dice *«\$1.852.056 descuadres – resta \$1.693.412»* (págs.. 34, 35 arch. 3, págs.. 42, 43 arch. 15 C01), que fue justamente el valor que le fue descontado a la trabajadora en la liquidación final de prestaciones reseñada al inicio de las consideraciones.

Los descuentos se pretendieron justificar por parte de la empleadora con los consecutivos o vales provisionales de domicilios expedidos por la compañía el 1, 3, 10 y 11 de septiembre de 2020 a nombre de la cliente María Alejandra Maldonado por pedidos que sumaron respectivamente \$523.894, \$362.111, \$591.181, \$378.155, frente a los que ambas partes allegaron pantallazos de los detalles de movimiento de las transferencias realizadas en las mismas fechas por \$524.000, \$363.000, \$592.000 y \$379.000 a una cuenta Bancolombia (págs. 29-32 arch. 3, págs.. 48-55). Estos pedidos suman \$1.855.341 y el monto global que le fue descontado a la demandante fue \$1.892.341.

De manera que, las deducciones realizadas por la demandada, no corresponden a presuntos créditos efectuados por la compañía; sin embargo, de las autorizaciones aportadas no se puede deducir que la trabajadora haya avalado los descuentos efectuados bajo estos conceptos y mucho menos por domicilios no cancelados por clientes; lo que constituye una clara prohibición al tenor de lo dispuesto en el num. 1º del art. 59 del CST, y podría enmarcarse también en el num. 2º de la citada norma, porque en suma estaría obligando a la trabajadora a comprar (en este caso pagar) los productos de la empresa, por no haber recibido el dinero por parte del cliente al cual se le envió un pedido, por fallas en la trazabilidad y verificación real y efectiva de las transferencias electrónicas, frente a lo cual también vale la pena recordar que la autorización no se puede presumir sino que debe constar claramente por escrito, en un documento en el que no quede ninguna duda de que el trabajador está facultando a su empleador para efectuar determinado descuento, además de la verdadera existencia de la obligación a cargo del trabajador (CSJ SL 16 marz. 2010 rad. 33668).

Aunado a lo anterior, en sentir de la Sala estas situaciones constituyen otra violación a las prohibiciones que tiene todo empleador, establecida en el art. 28 del CST, relacionada con que los trabajadores si bien pueden participar de las utilidades o beneficios de su empleador, nunca deben asumir sus riesgos o pérdidas, más aún cuando el empleador aquí pretendió disfrazar la imposición del cobro de un «préstamo» a cargo de la trabajadora, para cubrir erogaciones con el fin de solucionar los problemas que se presentaron relacionados con retrasos en las transferencias que pretendían pagar los productos a comercializar, supuestamente ocasionados por su culpa, cuando

precisamente son los riesgos en que incurre toda empresa y lo que sucedió en el presente proceso, es que el empleador trasladó ese riesgo a su trabajadora.

Es que los errores o las imprudencias de un empleado, aun cuando hayan ocasionado un aparente perjuicio para la empresa, no facultan al empresario para hacer descuentos de manera unilateral del sueldo del trabajador; estas pérdidas hacen parte del riesgo empresarial, así generen un perjuicio tangible a la empresa y en esa medida, ese perjuicio correrá exclusivamente a cargo del empleador, sino, de desdibujaría el contrato de trabajo suscrito entre las partes, recayendo en un contrato de asociación, lo que aquí evidentemente no sucedió. El perjuicio que pudo haber sufrido el empresario y el resarcimiento de los daños, deberá ser reclamado por el legitimado ante la jurisdicción competente, pero no puede ser avalado por esta Sala para que haya sido descontado por la demandada de la nómina de la actora y de la liquidación final de sus prestaciones sociales.

Además, tales descuentos no deben ser asimilados a un crédito otorgado por el empleador al trabajador, por cuanto no existió un acto jurídico patrimonial en el que las partes acordaran que una de ellas prestaría una suma de dinero a la otra, y que por tanto dicho valor debía ser reintegrado. En consecuencia, se **confirma** la decisión en este aspecto.

**Indemnización moratoria establecida en el art. 65 del CST.**-Para establecer su procedencia, la jurisprudencia ordinaria laboral ha definido, de antaño, que se debe estudiar, en cada caso particular, la conducta remisa del empleador, para con ello establecer, si su obrar, al abstenerse de pagar en forma oportuna y completa los salarios y prestaciones sociales a la finalización del nexo contractual, está precedido o no de buena fe, por encontrarse justificado en motivos serios que, a pesar de no resultar jurídicamente acertados, sí pueden ser considerados como atendibles (CSJ SL12854-2016 rad. 45175).

En el presente caso, no está en discusión que la relación laboral estuvo vigente hasta el 12 de octubre de 2020, y así se constata con la transacción y la liquidación final de prestaciones sociales. Así mismo, se encuentra claramente establecido que la sociedad demandada le pagó el neto fijado en la liquidación final el día 26 del mismo mes y año (\$1.466.621), tras hacer la última

deducción por mercados no pagados, a pesar de reseñar contablemente otra situación (págs. 27, 36-40 arch. 3, págs. 39, 44-47, 56, 57, 66 arch. 15 C01).

De manera que, no queda duda de que la compañía efectuó estos descuentos sobre el salario y las prestaciones sociales de la trabajadora, por ende, evidentemente no pudo acceder totalmente a los derechos mínimos e irrenunciables que como ex trabajadora tiene, y aquí la demandada no justificó idóneamente que los descuentos se encontraban legalmente autorizados, porque pretendió disfrazar la imposición del cobro de un «préstamo» a cargo de la trabajadora, pero se itera, los perjuicios que hubiere podido tener el empresario por presuntos domicilios no cancelados por clientes, de ningún modo pueden afectar la existencia de los derechos laborales de los trabajadores, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo establece el art. 28 del CST.

Aunado a ello, según el art. 157 *idem*, subrogado por el art. 36 de la Ley 50 de 1990, los créditos causados y exigibles de los operarios, por conceptos de salarios, prestaciones e indemnizaciones, son de primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás, situación a la que se hace referencia porque al margen de que la demandada haya aducido también, que tenía dificultades económicas y que por ello efectuó planes de retiro voluntario, jurisprudencialmente se ha establecido que la crisis económica o el estado de liquidez de una empresa, no la exonera de las sanciones moratorias (CSJ SL 3 may. 2011 rad. 37493, CSJ SL 24 ene. 2012 rad. 37288 y CSJ SL 24 de abr. 2012 rad 39319), y aquí con el último certificado de existencia y representación que reposa de las págs. 19-28 del arhc. 15 C01, no se acredita que la compañía se encontrara en liquidación o en estado de reestructuración en vigencia del vínculo laboral, solo a partir del 14 de octubre de 2020 se decretó su disolución.

En consecuencia, al existir ese saldo pendiente de pago, que se desprendió de los descuentos efectuados sobre salarios y prestaciones sociales de la trabajadora, se **confirmará** la condena apelada respecto de la indemnización moratoria del art. 65 del CST.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del CGP se impondrán costas en la alzada a cargo de la demandada comoquiera que le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación; para tal efecto se deberán incluir

como agencias en derecho el equivalente aun salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia apelada proferida el 3 de octubre de 2022 por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Itagüí, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Costas en la alzada a cargo de la demandada, como se indicó en las consideraciones.

**TERCERO:** Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

Magistrada ponente

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**  
Magistrado

(\*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/Eu870KsvkBtFiXwyd-pw8aUBosJwEzViYGiTcXFzPSwzAg?e=ozv9lO](https://my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eu870KsvkBtFiXwyd-pw8aUBosJwEzViYGiTcXFzPSwzAg?e=ozv9lO)

**Firmado Por:**  
**Luz Patricia Quintero Calle**  
**Magistrada**  
**Sala 017 Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ba8363e597f2766672a2e88ffc7e19375430fc5f74153a09055992d7e41e9fa2**

Documento generado en 01/04/2024 02:20:02 p. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**